

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Apelación Auto

Exp. 018-2021-00272-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Quinta de Decisión Laboral, a resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, frente al auto que resolvió conceder una medida cautelar y negar otra dentro del proceso ordinario laboral adelantado por LEONEL DE JESÚS GRAJALES MUÑOZ en contra de TERMITA S.A. en liquidación, FRANCISCO JAIRO ZULUAGA SERNA, MARIA CLAUDIA ZAPATA ZULUAGA y NICOLAS ZAPATA ZULUAGA.

ANTECEDENTES:

El demandante puso en marcha este proceso, con el fin de obtener la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo celebrado desde el 01 de febrero de 1994 con Frank Zuluaga Serna, quien falleció en noviembre de 2020, a quien le suceden su hermano Francisco Jairo Zuluaga Serna y dos sobrinos María Claudia y Nicolás Zapata Zuluaga, relación en la que aduce se presentó una sustitución patronal con Termita S.A. en liquidación desde el 01 de marzo de 2005, para en consecuencia obtener el reconocimiento y pago de los salarios, las prestaciones sociales, las vacaciones, las sanciones moratorias que se adeudan y las costas del proceso.

El Juzgado de Conocimiento que lo es el Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, admitió la demanda por auto del 24 de febrero de 2022 (Archivo 05) ordenando la notificación a cargo de la activa, y estando integrada la litis a la fecha, en virtud a la medida cautelar pedida desde el escrito de demanda (Pág. 4 Archivo 02), y complementada por escrito arribado con posterioridad (Archivo 09), referida a la inscripción de la demanda en el proceso de liquidación de la empresa Termita S.A en liquidación, además del embargo de los bienes que aparecen a nombre de las personas naturales demandadas a fin de dar garantía a los derechos laborales reclamados, especificando en el último de los escritos que debía embargarse el bien inmueble con matrícula inmobiliaria N° 020-58110 de la Oficina de Registros Públicos de Rionegro - Antioquia ubicado en el Municipio de Guarne - Antioquia, por considerar que dado el eventual desalojo que pudiera sufrir el demandante de la finca donde presta sus servicios sin remuneración de la que no se lucra ni usufructúa, se ponen en riesgo sus derechos laborales.

Para definir esa cuestión, el Despacho en diligencia que celebró el 26 de octubre de 2022 CONCEDIÓ la medida cautelar consistente en ordenar la inscripción de la demanda en el proceso de liquidación de la empresa Termita S.A. en liquidación, ordenando al liquidador tenerlo en cuenta para efectos de la graduación del crédito. NEGÓ el embargo de los bienes que aparecen a nombre de Frank, Francisco y los demás demandados.

Como argumentos de la decisión, adujo la a *quo* que conforme a lo preceptuado en el artículo 85A del CPTSS, en coherencia con lo evocado en la sentencia C-043 de 2021 que dio paso a una interpretación amplia de dicha disposición y permitió la formulación de medidas cautelares previstas en el literal c), numeral 1° del artículo 590 del CGP, era dable imponer la inscripción de la demanda dado el fin social de la norma y la prueba obrante en el expediente de la disolución y estado de liquidación en el que entró la empresa demandada y sobre las personas naturales vinculadas, adujo que

en modo alguno se logró demostrar que estuvieran realizando actos tendientes a insolventarse a más de estar por definir la procedencia de los derechos pedidos en cabeza de éstos.

La activa se apartó de la decisión aduciendo que de parte de las personas naturales, aunque no se han evidenciado conductas de insolvencia, si se han verificado acciones para evitar que se continúe y llegue a final término el proceso, por lo que la medida cautelar de embargo debe ser concedida.

Por su parte, Termita S.A. en liquidación a través de su mandataria judicial, interpuso recurso de reposición y en subsidio suyo el de apelación, por considerar que el principio de universalidad rige dentro de los procesos de insolvencia en el que debe existir un tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso sin perjuicio de la prelación de créditos y preferencias. Aduce que del acervo probatorio y acorde a lo contestado en la demanda, se planteó una falta de legitimación, pues no existe duda que se demandó a quien no era, pues si bien Frank Zuluaga era accionista mayoritario de Termita S.A. en liquidación, el contrato se surtió fue con Frank Zuluaga como persona natural quedando de ese modo excluida la empresa.

La directora del proceso sostuvo su posición y concedió las alzas, razón por la que atañe a esta Sala el conocimiento del trámite.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero destacar que la Sala es competente para resolver el asunto, dado que el auto atacado se encuentra previsto en el numeral 7° del artículo

65 del CPTSS, según el cual son recurribles a través de la apelación las decisiones de primer nivel que decidan sobre medidas cautelares.

A partir de los antecedentes, el problema jurídico consiste en determinar si la resolución de las medidas cautelares pedidas por el promotor de la litis, resultan pertinentes de cara a las exigencias procesales requeridas y el proceso de liquidación judicial al que la sociedad convocada ha estado sometida.

Pues bien, para dar resolución al disenso presentado por la activa, se tiene que es cierto que la Corte Constitucional en sentencia C- 043 de 2021, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad frente al artículo 85 A del CPTSS, concluyó que las medidas cautelares consagradas en el artículo 590, literal c), numeral 1° del Código General del Proceso, son aplicables al procedimiento laboral, por lo que no se limita a la caución que esa normativa regula, quedando la parte resolutive de la providencia así:

PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, por el cargo de igualdad analizado, en el entendido que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal “c”, numeral 1, del artículo 590 del Código General del Proceso.

Y en la parte motiva razonó en los siguientes términos:

En efecto, la medida cautelar innominada consagrada en el literal “c”, numeral 1º, del artículo 590 del CGP, es una prerrogativa procesal que por su lenguaje no explícito puede ser aplicada ante cualquier tipo de pretensión en un proceso declarativo, dado que no condiciona su procedencia a una situación concreta definida por el legislador. Es a través de este tipo de medidas que el juez laboral puede, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, determinar si procede su adopción de acuerdo con el tipo de pretensión que se persiga. A través de ellas el juez podrá adoptar la medida que “encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”.

En atención a ello, es claro que, la medida cautelar innominada o atípica en atención a su manejo de lenguaje no explícito, puede ser aplicada en cualquier tipo de pretensión dentro de un proceso declarativo, lo que implica que sólo procederían las medidas cautelares previstas en el art 590 del CGP literal c) lo que excluye de tajo el embargo y secuestro de bienes inmuebles por no ser el caso de la permisión legislativa, al estar taxativamente reglamentados en el ordenamiento jurídico.

Adicionalmente, para dar paso a esa prerrogativa normativa procesal, no solo se hace necesario determinar los bienes con la prueba anexa de su titularidad cuya carga probatoria es inherente a la petición elevada, sino que del contenido de ese artículo 590 se extrae que debe verificarse la existencia de tres requisitos: la legitimación, la existencia o la vulneración del derecho, la apariencia del buen derecho y la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida.

Lo anterior deja sin peso la petición del demandante, ya que a más de no estar dentro de las posibilidades dadas por la corporación intérprete de la Constitución, en coherencia con la intelección desprendida del ya plurimentado artículo 85A, no se delimitan como es exigido los bienes en cabeza de las personas naturales demandadas, ni se acredita en manera alguna la amenaza o vulneración que haga emerger en necesaria y efectiva la medida cautelar con la que pudiese ser garantizada la eventual condena de rubros laborales en beneficio del actor y a cargo de las personas naturales demandadas, sin que baste para ese efecto, la denuncia interpuesta ante la Inspección Municipal de Policía de Guarne - Antioquia (Pág. 5 Archivo 09) por amedrentamiento y amenazas, en tanto no es dable a esta judicatura dar por sentado que los sujetos activos de tales comportamientos sean los aquí codemandados, y tampoco, el pedimento de la restitución del inmueble que le fue dado en comodato al señor Grisales Vélez en vida de Frank Zuluaga Serna (Págs. 6-8 Archivo 09), se constituye en un elemento que defina la aludida transgresión, porque lo que se desprende del memorial incluido en el archivo 09 del expediente digital, es

que al señor Leonel Grisales le fue terminado el contrato de trabajo desde febrero de 2022 y pese a ello ha permanecido en el inmueble bajo el concepto de estar en trámite este proceso laboral, lo que evidencia un requerimiento que no se considera arbitrario, en tanto las causas que dieron origen a ese comodato ha desaparecido con el finiquito del contrato, además de no verse encaminado a obviar las obligaciones laborales que en este escenario pudieran declararse.

Ahora, atendiendo los argumentos de la pasiva, debe precisarse que conforme a lo que se desprende del certificado de existencia y representación legal de la sociedad Termita S.A en liquidación, esta persona jurídica se disolvió y entró en estado de liquidación mediante Acta de Asamblea N° 002 del 03 de octubre de 2020 registrada el 02 de febrero de 2021 (Págs. 14-27 Archivo 02), lo que evidencia que se trata del proceso de liquidación voluntaria regulado en el Código de Comercio, que valga decir, se encuentra desprovisto del fuero de atracción obligatorio, a diferencia del proceso de insolvencia regulado por el artículo 4° de la Ley 1116 de 2006, en el que se aplica el principio de “Universalidad” por medio del cual se integra a la totalidad de los acreedores.

En esa línea, al tratarse de un trámite voluntario proveniente de la decisión de los socios y accionistas reunidos en asamblea general, el legislador no tiene previsto un plazo para la presentación de créditos, y de hecho, no dispuso ninguna restricción en torno a la iniciación, continuación o admisión de procesos ejecutivos, por lo que no se hace imperativo en un límite temporal o etapa del proceso liquidatorio concentrar e incorporar a todos los acreedores dentro del escenario de liquidación voluntaria, sin que ello impida al liquidador realizar el inventario de activos con la inclusión de las obligaciones que se cobran en trámites judiciales en la calificación y graduación de créditos de la sociedad disuelta y en estado de liquidación a tono con lo previsto por el artículo 233 y 234 del Código de Comercio.

Adicionalmente, este proceso tiene como fin establecer la existencia de un contrato de trabajo y una sustitución patronal donde necesariamente se inmiscuye a Termita S.A. en liquidación, o antes Termita Ltda., como parte empleadora, revelando la documental que acompaña la demanda, indicios serios de su intervención en la relación laboral que pudo surgir con el actor, cuya calidad en el plano de la realidad es precisamente objeto de este litigio, por lo que no es dable asumir desde ya a partir de los argumentos de defensa de la oposición, la falta de legitimación por pasiva de la sociedad, ya que tal aseveración entrañaría que en los procesos declarativos donde se alega precisamente la existencia de una vinculación de índole laboral, el decreto de las medidas cautelares sea inoperante no siendo esa la intención de la ley, sobre todo cuando como en el presente caso, se vislumbran contextos trascendentales para advertir una inminente desaparición de la persona jurídica que pudiera estar llamada a responder por las acreencias que se persiguen, circunstancia que refleja las graves y serias dificultades que podrían interferir en el cumplimiento oportuno de las obligaciones que restarían efectividad a la sentencia.

En ese orden, considera esta Sala de Decisión que la medida decretada se torna en razonable para la protección del derecho objeto del litigio, la que por demás puede catalogarse como “innominada” pues no se encuentra expresamente contemplada en la ley, con la que no solo se da publicidad de su existencia, sino que se impone al liquidador incluir la deuda en la calificación y graduación de créditos con aprovisionamiento y reserva para su pago, sin perjuicio que de resultar la sentencia desfavorable a los intereses del demandante, se destine su distribución como remanentes entre los asociados, previa verificación del cubrimiento del pasivo externo en el orden de prelación legal (Artículo 427 C.Co.).

En esos términos la decisión habrá de mantenerse incólume, sin imposición de costas en la instancia por la forma en que fueron resueltas las alzadas.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto proferido el 26 de octubre de 2022 de procedencia conocida. Sin costas.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 13 fijados el 30 de enero de 2023
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.